

**Chillán, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.**

**Vistos:**

En estos antecedentes RIT 199-2023, RUC 2201030704-3, Rit Corte 6-2024, por sentencia de diecinueve de diciembre enero de dos mil veintitrés, la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, se condenó a HECTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ SUAZO a la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, la inhabilitación absoluta perpetua cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo, a la inhabilitación absoluta perpetua derechos políticos y a la 2 inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena”

Contra dicho fallo el defensor penal abogado Cesar Ramírez Burgos, en representación del condenado, interpuso recurso de nulidad por la causal prevista en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) este último en relación al artículo 297, todos del Código Procesal Penal.

El libelo fue declarado admisible, y en su vista se escucharon los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y la parte querellante.

Terminada la vista del recurso, el asunto quedó en acuerdo y se fijó la audiencia del día de hoy a las 10:00 horas con el objeto de dar lectura al fallo.

**Con lo relacionado y considerando:**

1º.- Dice que se invoca como infringida la contemplada en el artículo 374, letra e), en relación al artículo 342, letra c), este último en relación al artículo 297, todos del Código Procesal Penal,.

Señala el impugnante que como se desprende de la simple enunciación de las normas citadas, la legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y resuelven en definitiva en juicio oral *un trabajo de elaboración particularmente meticuloso y cuidadoso en la elaboración de sus sentencias*. La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297”. De esta forma “... si bien es cierto ha facultado a los tribunales para apreciar la prueba con libertad (en abierta y franca discrepancia con el sistema probatorio tasado del sistema inquisitivo), lo ha hecho en el bien entendido que los tribunales no pueden en modo alguno, como primera limitante, contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados” (Corte Suprema de Justicia, fallo de 12 de mayo de 2003, causa RUC 0100058837-3, Rol interno N°62-2002) concluyéndose como



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZQMXLCXXSW

corolario lógico que el fin de la fundamentación no es otro que permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia. Como bien señala la profesora María Inés Horvitz, "(...) la garantía procesal que asume enorme significación en un sistema de libre valoración de la prueba es el que impone al tribunal el deber de motivar el fallo, es decir, hacer que aquel justifique mediante argumentaciones racionales su decisión, sometiéndola a un control externo de verificación. En este plano se insertan las normas contenidas en los incisos segundo y tercero del artículo 297 del Código Procesal Penal" (Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo II, p. 335).

Indica que, naturalmente las garantías mencionadas cobran especial importancia, y se redobra la exigencia de su observancia, cuando se trata de casos en los que la sentencia puede llegar a imponer penas privativas de libertad de extensa duración. Es claro que, en el caso en comento, se sostuvieron dos teorías del caso; la del Ministerio Público y la querellante en cuanto a sostener una hipótesis de homicidio frustrado y de un delito de porte de arma de fuego consumado por parte de su representado; y la de la defensa que sostenía que éste no había cometido los delitos que se le imputaba por la Fiscalía y la querellante. No pudiendo entenderse lógicamente por que el tribunal acepta la postura del Ministerio Público, y no la de la defensa, como fluye del tenor literal de la sentencia recurrida. Infringiéndose con ello las reglas de la lógica como se explicará, por cuanto los testimonios incorporados resultan contradictorios e incoherentes, con otros antecedentes del juicio, vulnerando y en relación a otra prueba rendida, principios de la lógica, que pormenorizadamente se señalaran.

Señala que en el análisis de la prueba –y de lo cual se debe dejar constancia en la sentencia - se debieron evaluar relaciones de corroboración o confirmación - que se pueden dar en el material probatorio rendido y en la identificación de los factores que inciden en su mayor o menor fuerza probatoria, a saber, aspectos relativos a la credibilidad, autenticidad o si se trata de prueba directa o indirecta - de suerte que, el juicio oral era un juicio de ratificación de los distintos elementos probatorios, por cuanto no basta con afirmar algo para estimar que ello realmente fue así, sino que es indispensable que tal aseveración fuera refrendada por otros y no entrará en contradicción. Puesto que de lo contrario se vulneran los principios de la lógica.

En este sentido, analiza y transcribe parte de las declaraciones de los testigos don Víctor Alejandro Toledo Ramírez, Yamilet Alejandra Vargas Salazar, Gerson Antonio Medel Figueroa. pedro ángel Toledo herrera Jacobo Andrés Sepúlveda meza pedro Gonzalo parra valdivia



En resumen, indica, resulta evidente la vulneración a los principios de la lógica del tercero excluido y de no contradicción ya que las deposiciones de los testigos y tal como se afirmó precedentemente sobre la base de lo que consigna la sentencia son contradictorios entre sí, en cuanto a dos puntos esenciales: a) La posición en el vehículo de quien dispara; b) Quien es el autor de los disparos. En efecto, en las declaraciones inmediatamente prestadas luego de ocurrido los hechos para la víctima, como para José Soto Lazo, quien dispara es el chofer del vehículo, y que de acuerdo a la víctima directa sería la persona del imputado, cuestión que no refiere José Soto, el cual incluso precisa que dispara con la mano derecha y la izquierda sujeta el volante. La Sra. Yamilet, refiere haber visto al imputado en momentos previos como copiloto; Gerson Medel señaló en la declaración a la PDI, que el imputado iba de copiloto, y dice: “Ahí está mátenlo”. Patricio Toledo, no sabe si iba de copiloto o chofer, y refiere escuchar disparos; eso dijo a la Policía, sin embargo y previo al Juicio señaló a funcionario de Carabineros, que el imputado se baja del vehículo, dispara a la víctima, se sube al vehículo y luego se va.

Aporta que el material probatorio a valorar es la prueba que se rinde en juicio, pero también aquella recogida durante la investigación y que se incorpora al juicio mediante las herramientas contenidas en el artículo 332 del CPP, respecto de lo cual se realiza un ejercicio de corroboración. Y si bien es cierto que la valoración es libre. Esta no puede vulnerar los principios lógicos, en el caso en comento el principio de tercero excluido y de no contradicción.

a) El principio de no contradicción, significa que una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. Si es verdadera la proposición de que quien manejaba era el imputado, no puede ser verdadera que él iba de copiloto; Si se dice que quien disparó era el chofer; no puede ser que quien disparó fue el copiloto; Pero ambas premisas y en las dos situaciones enunciadas no pueden coexistir en un ejercicio de corroboración, so pena de vulnerar el principio de no contradicción;

b) El principio del tercero excluido, postula que A es B o A no es B, no hay una tercera posibilidad, la cual queda excluida. En este punto la afirmación de que quien manejaba es el imputado, excluye que él sea el copiloto; la 13 posibilidad de que quien dispara es el piloto excluye de que quien dispara sea el copiloto; de forma que forzar una coherencia y concordancia entre las declaraciones enunciadas, que se contienen en la sentencia misma - aun sosteniendo libertad probatoria – vulnera el límite que el propio legislador plantea a la valoración de la prueba. Máxime, cuando el propio imputado, en su propia declaración indica que quien disparó fue el conductor del vehículo, yendo el cómo copiloto.



Que, del análisis antes señalado, sostiene, sin que ello en caso alguno implique una revaloración de los hechos lo cual está vedado para la Corte de Apelaciones. Solamente con el análisis lógico - estructura lógica - de la sentencia se puede concluir que la afirmaciones fácticas de los testigos precedentemente indicados y de la información que proporciona la fotografía número 6; de entenderse coherentes, concordantes y corroborables entre sí - dichas pruebas - Ello sólo se puede realizar vulnerando los principios de no contradicción y de tercero excluido. Ya que, respetando los principios indicados, la conclusión es la contraria, en cuanto a que las deposiciones entre sí y en relación a la información que proporciona la fotografía son incoherentes, no concordantes y contradictorias en sus afirmaciones. Que no obstante ello, la sentencia concluye en el considerando décimo y en lo pertinente, a propósito de la decisión del Tribunal: “Que, la prueba de cargo rendida, consistente en testimonial, pericial, y documental, permitió establecer que, en la oportunidad y lugar señalados en el libelo acusatorio, el encartado Héctor Rodríguez Suazo, empleando un arma de fuego, para lo cual carecía de autorización de tenencia, porte o transporte, efectuó a lo menos tres disparos hacia el cuerpo de la víctima Víctor Toledo Ramírez, ocasionándole una serie de lesiones que se detallan en la acusación fiscal, de carácter grave, potencialmente mortales y que lo mantuvieron con riesgo vital; no obstante, el fallecimiento de la víctima no se produjo, atendida la oportuna y eficaz atención médica. Que, el medio empleado para efectuar las agresiones por parte del acusado, las diversas partes del cuerpo de la víctima en donde estas se produjeron y la reiteración de los disparos, permiten a estos sentenciadores evidenciar el potencial homicida de la conducta desplegada por el hechor, así como el conocimiento y la voluntad de éste acerca de su actuar y la finalidad perseguida por él, de modo tal que se configura una acción dolosa homicida cuyo resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo...”

Afirma por otra parte que en la sentencia que no se controvertió la dinámica del delito. Aserto que no es efectivo toda vez que la teoría de caso de la defensa fue que el imputado iba como copiloto y que no disparó. De ahí que le es relevante precisar que lo señalado en el considerando Undécimo no resulta compatible con lo señalado por la defensa. Para una acertada comprensión transcribe lo pertinente: “UNDÉCIMO: *Que, en primer lugar, cabe destacar que, en general, la dinámica de ocurrencia de los hechos no resultó mayormente controvertida, salvo ciertos puntos específicos – como la ubicación del vehículo del cual se disparó-...*” De forma entonces que la sentencia en sus conclusiones vulnera los principios lógicos de no contradicción y tercero excluido. Con claro perjuicio a los intereses



*de su representado. Toda vez que de haberse respetado los límites a la libertad probatoria su representado hubiere sido absuelto de los cargos imputados.*

Solicita, en definitiva, se acoja este recurso declarando que la sentencia recurrida se ha dictado con infracción de lo dispuesto en los artículos 374 letra e) en relación al artículo 342, letra c), y este último en relación al artículo 297, todos del Código Procesal Penal. Y que consecuentemente se anula la sentencia recurrida de nulidad y el juicio, ordenando devolver los antecedentes al tribunal a quo para que se fije nuevo día y hora para realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado .

**2°.-** Que el principio de la no contradicción se puede enunciar como: “es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido”. En otras palabras, “es posible pensar que el objeto pueda ser algo ahora y no ser ese algo después, pero no al mismo tiempo. Así, lo que antes fue un libro puede ser ahora basura o cenizas. Yo puedo estar aquí ahora y no estar después, pero no al mismo tiempo”.

Por otro lado, el principio de tercero excluido significa que, de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero, y toda otra tercera opción queda excluida.

**3°.-** Que la sentencia recurrida en el considerando duodécimo establece la participación del encartado Héctor Rodríguez Suazo, en los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

Al respecto, se describen los hechos y el episodio que motivó los disparos realizados por el condenado. Se sostiene que dicho episodio fue descrito claramente por doña Yamilet Vargas Salazar, episodio que también fue narrado por Víctor Toledo, y por Gerson Medel.

Del mismo modo, se señala allí, que el comisario Pedro Parra, refirió haber recibido la declaración de Carlos Aedo, quien le indicó que, efectivamente, Víctor Toledo (la víctima) se involucró en la pelea, para separarlos, oportunidad en que le propinó dos golpes de puño a Héctor Rodríguez.

El mismo hecho, fue relatado por el propio acusado y por la testigo de descargo doña Karina Palma Jaramillo, quienes también refirieron que Rodríguez Suazo había sido agredido por Carlos Aedo, que le habría lanzado piedras, que lo habría golpeado con un palo y que finalmente habría intervenido Víctor Toledo para separarlos y que Rodríguez y su familia, en su vehículo, se habían retirado del lugar.

Indica la sentencia que dicho episodio anterior, que, en todo caso, no es motivo del juicio, resultó sin duda el gatillante de los hechos que ocurrieron posteriormente, esto es, los disparos a la víctima, ya que después de que el



acusado fuera agredido por un tercero, y que Víctor Toledo interviniera en la pelea, el encartado Rodríguez Suazo regresó al lugar, a bordo de un vehículo, desde el cual, como se ha dicho, se efectuaron los disparos en contra de Víctor Toledo.

Queda claro, entonces según el fallo impugnado, que el imputado regresó al lugar, presumiblemente, a buscar venganza, puesto que, no existía ningún otro motivo para ello, y, ante ello, no resulta ilógico que regresare armado, y que, ante la imposibilidad de encontrar a Carlos Aedo, quien ya se había retirado, las emprendiera en contra de Víctor Toledo, quien, como él mismo afirmó y también lo señaló Aedo al comisario Parra, había agredido con dos golpes de puño al encartado, cuando lo separó de la pelea.

Como se advierte, sostiene el fallo, los dos testigos presenciales, que, indubitadamente se encontraban en el lugar de los hechos, reconocen directamente a Héctor Rodríguez, como la persona que, desde el interior del vehículo jeep, color blanco, efectuó tres disparos en contra de Víctor Toledo, y que luego se dio a la fuga a bordo del mismo vehículo. Ninguno de los testigos manifestó ninguna duda, ni en el juicio, en donde reconocieron al encartado en la sala de audiencias, ni durante la investigación, en donde ambos, desde el inicio de las indagatorias, señalaron que había sido Héctor Rodríguez quien había disparado a Toledo, indicando, ambos, que el imputado era persona conocida por ellos, por ser vecino del sector.

Por otro lado en el numeral 7° y 8° del considerando referido anteriormente, la sentencia se hace cargo de las contradicciones sostenidas por la defensa respecto de la declaración de Víctor Toledo; lo mismo, respecto del testigo Gerson Medel señalando que: *Sus relatos, se apreciaron veraces y, además, concordantes entre sí, y con el testimonio de doña Yamilet, que situó al encartado en el lugar del copiloto rumbo a la cancha de fútbol, y con otros indicios de participación del acusado, como lo que la pelea ocurrida antes de los disparos, y la conducta posterior a los hechos del propio encartado.*

*En consecuencias, las reclamaciones que, en torno a estos testimonios señaló la Defensa, serán desechadas.*

Que, por otro lado, la defensa invocó el testimonio de José Soto. En relación a este testimonio, que sindicaba al encartado como el autor de los disparos, pero en el puesto del conductor del móvil, lo cierto dice el fallo, es que no se tienen mayores antecedentes, porque dicho testigo no compareció al juicio a prestar declaración, de modo que no pudo ser examinado, ni contra examinado y así dar razón de sus dichos, de forma que el Tribunal pueda apreciar, en estrados, la credibilidad de dicha persona.



Que en relación con la existencia de prueba gráfica y objetiva aportada por la defensa que determinaba una dinámica de ocurrencia de los hechos que exculpaba a su defendido, y que fue descartada por el tribunal, señalando que obedece a una apreciación que dicha parte hace de una imagen que, ningún testigo o perito, dijo que fuese realmente la posición del vehículo y, por cierto, tampoco que el vehículo hubiese virado hacia la Derecha.

Luego el fallo impugnado, se hace cargo de la versión de los hechos entregada por el condenado que también fue referida por doña Karina Palma, su conviviente, versión que fue descartada señalando los sentenciadores como razón para ello, que se sustenta en sus propios dichos, y en los de su conviviente, dando fundada razón porque la descarta, indicando que la versión de los hechos que entrega el acusado es ilógica, y se contrapone con su propia conducta, posterior a la ocurrencia de los hechos, puesto que, conforme él mismo lo relató y también doña Karina Palma, después de efectuados los disparos a la víctima, éste se dio a la fuga del lugar, se dirigió a la ciudad de Chillán y, a la entrada de la comuna se juntó con su mujer y se dirigieron a Talcahuano, a pesar de que ambos señalaron que debía trabajar en Pinto, de modo tal que, evidentemente, lo que hizo, fue huir del lugar y esconderse, pues sabía que habían herido a Víctor Toledo y, por cierto, que él había disparado en contra de la víctima.

En consecuencia, la tesis de descargo levantada por la Defensa fue desechada fundadamente.

Como puede apreciarse, no existe una contradicción en la valoración de los testimonios prestados en juicio, ni entre los testigos, ni entre estos y la declaración del encartado y la de su conviviente.

**4°.-** Que, sin perjuicio de lo anterior, del examen de la sentencia se comprueba que, en sus fundamentos segundo, tercero, cuarto, quinto, se detalla la acusación y las alegaciones, defensas y pretensiones de los intervinientes, como también en el considerando sexto la declaración exculpatoria del imputado; en el séptimo que no hubo convenciones probatorias y en los razonamientos octavo y noveno, se detalla pormenorizadamente toda la prueba producida por el órgano persecutor, querellante y la defensa.

Así, conforme a los elementos de convicción incorporados al juicio, en el considerando décimo tercero se establece el hecho punible, el que es calificado jurídicamente en el considerando décimo cuarto como constitutivo del delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal en grado de desarrollo de frustrado y el delito porte ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en los artículos 2 letra b) y 9 inciso 1° de la ley 17.798. Además, en los acápites ya anotados, se describen los elementos objetivos y subjetivos del tipo



penal precedentemente referido, las exigencias señaladas por el legislador para su configuración y se especifican y analizan los diversos medios de prueba incorporados que se detallan, respecto de cada uno de los hechos que se dan por establecidos y consecuentemente a ello, del delito perpetrado.

Del mismo modo, en dichos apartados y especialmente en el duodécimo, se determina la participación que le cupo al acusado en el suceso asentado, haciéndose especialmente cargo de los dichos de éste, entregando las razones por las que se les resta verosimilitud.

**5°.-** Que de lo referido es incuestionable que, en los aludidos razonamientos, se indican, valoran, confrontan y ponderan todos los elementos de juicio aportados, conforme a los cuales, mediante una exposición clara, lógica, completa, suficiente y adecuadamente razonada, sin advertirse contradicción alguna a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados, cumpliéndose además los otros requisitos establecidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, los sentenciadores arriban a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia del hecho que se dio por establecido en el acápite décimo segundo.

Del mismo modo, se aprecia igual exposición y razonamiento plasmando en los términos ya anotados, en los que se explican los motivos por los que los juzgadores califican los hechos establecidos como constitutivos del delito de homicidio en grado de frustrado y el delito de porte ilegal de arma de fuego. También, de la manera ya referida, se especifican las fundamentaciones lógicas y razonadas que sustentan sus conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por las que conforme a lo estatuido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, se determina la participación que en los hechos establecidos le correspondió al acusado, concluyendo los sentenciadores que el imputado Rodríguez Suazo participó en calidad de autor del delito de Homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal y de porte ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en los artículos 2 letra b) y 9 inciso 1° de la ley 17798.

El delito de homicidio, se encuentra en grado de desarrollo de frustrado.

El delito de porte ilegal de arma de fuego, se encuentra en grado de ejecución de consumado.

Conclusión que como nítidamente se aprecia del fallo en estudio, se sustenta en los diversos elementos de convicción pormenorizados, analizados, contrastados, concatenados y valorados en la sentencia.

**6°.-** Que, en la especie, se puede constatar, de la sola lectura de los considerando octavo, noveno, decimo, undécimo, duodécimo, y decimotercero de





la sentencia recurrida, que en relación con los hechos materia de la acusación, por los cuales fue condenado el encartado, y por el cual se ha deducido el recurso, los sentenciadores se hacen cargo de toda la prueba y mediante un razonamiento lógico y en consideración de las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, logran arribar a una decisión de condena, tomando en cuenta elementos probatorios que estiman que conducen necesaria e inequívocamente, a determinar que el acusado, ha tenido participación en el delito de robo con violencia, materia de la acusación, en calidad de autor.

Lo anterior a juicio de estos sentenciadores reúne suficientes consideraciones y análisis respecto de los medios de prueba rendidos y razonamiento para llegar a la fundamentación suficiente que la última ratio requiere para sancionar al acusado.

7°.- Que, la circunstancia de no compartir la recurrente, los razonamientos de los sentenciadores, no significa que en la sentencia que se impugna haya incumplido el requisito exigido en la letra c) del artículo 342, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297”*.

8°.- Que los razonamientos precedentemente reseñados, constituyen una reflexión idónea que permite entender dentro de la lógica, la convicción de los jueces cuyas conclusiones no desbordan los márgenes entregados por la ley y especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados. La decisión demuestra razón suficiente que no contiene imperfecciones y por lo mismo no es posible generar una nueva prueba para desvirtuar la convicción a la que arribaron los magistrados que estuvieron presente en la discusión, rendición y observaciones de las acreditaciones que efectuaron los intervinientes sea para demostrar la existencia del delito y su participación, como también desestimar la prueba de descargo.

9°.- Que, en consecuencia, no se visualiza la concurrencia de la causal de nulidad del artículo 374, letra e) invocada por la recurrente, al no existir infracción a los artículos 342 letra c) en relación con el artículo 297 del Código Procesal Penal, por lo que, será rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 342, 374 letra e) 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad, interpuesto por el defensor penal público CÉSAR RAMÍREZ BURGOS, abogado, en representación de don HECTOR ALEJANDRO



RODRIGUEZ SUAZO, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, en la causa RIT 199-2023, RUC 2201030704-3, declarándose que ella no es nula, como tampoco lo es el juicio oral que le sirvió de antecedente.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes que asistan a la audiencia fijada al efecto, sin perjuicio de su notificación por el estado diario, hecho devuélvanse los antecedentes.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Gumercindo Quezada Blanco, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma el ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

**R.I.C. 6-2024-PENAL.-**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZQMXLCXXSW

Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Chillan.

En Chillan, a veinte de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DZQMXLCXXSW